

## r e p o r t a j e



# Del agua del Ebro al “cártel del agua”

Plataformas ciudadanas, grupos ecologistas y sindicatos coinciden en la existencia de un mercado negro y la inadecuada gestión del agua en la cuenca del Segura

**Ante la polémica actual con el Plan Hidrológico Nacional heredado del Gobierno del PP y el faraónico proyecto de trasvase del agua del Ebro, es necesario recuperar una nueva cultura del agua que ponga fin al abuso de unos pocos y asiente un desarrollo económico sostenible y compatible con el medio ambiente.**



Un manifestante alude al apoyo que los alcaldes prestan a los especuladores.

Francisco Turrión/FSAP Murcia

La Fiscalía de Madrid ha pedido el procesamiento de los más altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) entre los que se encuentra el anterior presidente, el comisario de Aguas y el secretario general, estos dos últimos actualmente en funciones.

La Fiscalía de Madrid, en el informe de conclusiones que ha remitido a la Fiscalía de Murcia, denuncia que hay un auténtico mercado negro de agua en Murcia y Alicante controlado por poderosos grupos económicos a los que la CHS les ha consentido traficar con el agua de todos para obtener grandes e ilícitos beneficios económicos de escasa transparencia fiscal.

Les imputa delitos de prevaricación, extracción ilegal de

aguas, usurpación patrimonial de agua pública y delitos contra la Hacienda Pública. La investigación se ha centrado en 22 empresas acusadas de robar 60 millones de metros cúbicos anuales de aguas públicas para el riego ilegal de 8.500 hectáreas de Murcia, Alicante y Almería. Cifra el mercado negro de agua controlado por estas empresas en 18 millones anuales de euros (3.000 millones de las antiguas pesetas) parte de los cuales se están ocultando a la Hacienda Pública.

Este auténtico “cártel del agua” (como así lo califica el fiscal decano de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, en su informe) se ha venido dedicando a expoliar un ingente volumen del agua para generar regadíos ilegales en detrimento de los derechos de miles de pequeños regantes tradicionales y de los de-



Manifestación en Murcia.

rechos del resto de los ciudadanos del sudeste de la Península.

Las consecuencias de esta depredación consentida del patrimonio hídrico, y reiteradamente denunciada por las asociaciones de regantes y grupos ecologistas de la zona, se ha hecho sentir en el río Segura, degradado a la condición de cloaca maloliente en todo su tramo alicantino, y que ha hecho salir a sus vecinos ribereños a manifestarse en la calle en múltiples ocasiones exigiendo el río vivo al que tiene derecho.

Pero no sólo el río Segura es la víctima de tanta permisividad con la delincuencia medioambiental. Importantes manantiales del noroeste de Murcia, y algún río, que son patrimonio cultural y natural de sus gentes y de sus pueblos (Caravaca de la Cruz, Moratalla y Bullas) están a punto de secarse por la explotación ilegal de pozos para el riego de plantaciones clandestinas de lechugas, brócoli y otras hortalizas. Lo que no se permite a sus gentes, y lo que no harían por resultar suicida, la CHS consiente que lo hagan empresas hortofrutícolas ajenas y originarias del entorno de la costa. Y todo ello a pesar de que en la cuenca del Segura está prohibido ampliar regadíos desde 1986 hasta la actualidad.

La impotencia de los ciudadanos agrupados ya en 150 colectivos les ha llevado recientemente a pedir justicia incluso al Rey y al nuevo fiscal general del Estado porque los intereses de los especuladores son muchos y no

conocen freno en los poderes públicos de la región.

Este “robo del agua”, que ahora por fin sale a la luz pública, ha sido ocultado durante años a una sociedad demasiado confiada e indolente con sus políticos y a la que se ha sometido mediáticamente a un tercer grado de permanente “estrés hídrico”, alimentado por la filosofía de la “sequía estructural”, pilar básico del “espíritu hidrológico nacional” del Gobierno anterior.

La consigna era que había que mirar para afuera y no para dentro para solucionar el problema del agua. La solución estaba en traer agua de fuera. La solución era el Ebro.

La confrontación que se larvaba a mediados de los 90 entre intereses por el agua: los generales y los de los grupos investigados ahora por la Fiscalía, había que evitar que creciera dentro. Desviar la atención del problema real: el desgobierno del agua en el Segura. Mirar a lo lejos para encontrar soluciones, era la estrategia del poder.

La magnitud total del “mercado negro del agua”, según se ha publicado, podría ser del orden de los 200 millones de metros cúbicos anuales destinados a regar 30.000 Ha. ilegales (y los beneficios de 60 millones de euros (10.000 millones de pesetas).

Hay que insistir en lo de regadíos ilegales porque a ningún regante del levante español se le ha autorizado en los últimos 18 años ampliar sus cultivos y sus zonas de riego. A ellos les es de



Grupos ecologistas se manifiestan en contra de regadíos ilegales.

r e p o r t a j e



aplicación la Ley de Aguas, el Real Decreto 3/86 y el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura. Para ellos es la escasez por falta de agua: la "sequía estructural que nos limita". En cambio, para las empresas investigadas por la Fiscalía, y algunas otras que también participan en "el robo (estructural) del agua", la Ley aplicada ha sido la de los hechos consumados.

Desde 1999 el comité de empresa, siempre a propuesta de CCOO, viene denunciando en la propia CHS casos concretos de irregularidades y tratos de favor en relación con los usos del agua. En las reuniones con los presidentes de la CHS, e incluso en las mantenidas con algún secretario de Estado y sus asesores más directos, se explicaba que las denuncias de los guardas fluviales y demás funcionarios (sobre pozos ilegales; tomas ilegales del río Segura y de los canales del trasvase Tajo-Segura y sobre la proliferación de amplias extensiones de regadíos ilegales en zonas donde antes solo había monte) no servían para nada.

A finales de 2002 esta situación es puesta en conocimiento del entonces secretario de Estado de Aguas y Costas, Pascual Fernández, por el responsable confederal de Medio Ambiente de CCOO, Joaquín Nieto, durante una reunión celebrada en el Ministerio de Medio Ambiente y a la que asistieron responsables de CCOO de Murcia, Madrid y de la propia CHS.

Mientras los infractores iban año a año obteniendo sustanciosos beneficios económicos con el agua que habían robado, las denuncias de los guardas fluviales, Guardia Civil (SEPRONA) y grupos ecologistas se introducían en una lenta cadena burocrática, que duraba incluso años, sin que al final se pusiera freno al robo tan descaradamente perpetrado.

No dotando de medios y de personal al Servicio de Denuncias (solo tres personas han estado durante años encargadas de resolver cientos de expedientes) se ha favorecido indirectamente la caducidad de muchas de ellas, quedando así impunes importantes robos de agua durante años. En el mejor de los casos, el expediente se resolvía con una sanción económica ridículamente desproporcionada en relación con los beneficios generados ilícitamente. Tampoco la CHS imponía medidas cautelares durante la tramitación de los expedientes administrativos que hubieran cortado de raíz el expolio.

La imagen de impecable gestión, que se ha querido dar por parte de la CHS, ha sido una rea-

lidad virtual comparada con lo que había y se tropezaban todos los días los agentes de la Guardia Fluvial, Seprona y forestales en el campo.

Gracias a esta permisividad, y una elevada dosis de ingenuidad por parte de la CHS ahora puestas al descubierto, las fincas que habían sido tradicionalmente de monte, secano o de cultivos con bajas dotaciones, son transformadas rápidamente en regadíos con altos consumos de agua (subterránea o superficial) con la consiguiente revalorización y plusvalía.

Estos terrenos pasan, de la noche a la mañana, a tener un valor de venta varias veces superior a su valor inicial de compra y todo ello gracias al uso y abuso del agua ilegalmente consolidado.

Puede subyacer un importante fraude fiscal, aun no investigado, en todas estas transacciones comerciales con suelo rústico cuyo valor añadido lo da la apropiación de importantes volúmenes de agua pública, como ha apuntado el fiscal Valerio. No es casualidad que las cajas de seguridad de los bancos de la región estén atestadas de dinero negro, como ha publicado recientemente La Verdad de Murcia.

Urge devolver el agua robada a la sociedad para que ésta la administre en beneficio de todos; el agua está aquí y no hay que mendigarla fuera. Este parece ser el grito unánime que se deja sentir a lo largo del todo el cauce del río Segura por sus gentes, colectivos, plataformas ciudadanas, grupos ecologistas y sindicatos. Urge un plan de saneamiento integral de las instituciones, dice José Antonio Muñoz Grau portavoz del colectivo más activo, PRO-RÍO de Orihuela. No debemos solapar dos cuestiones fundamentales, nos dicen: la inadecuada gestión del agua y el trasvase del Ebro.

No sólo está en juego la forma de gestionar el agua en los

próximos años, sino también el grado de pluralidad, civilización y democracia que vamos a ser capaces de conquistar en beneficio del progreso de todos.

Propuestas de futuro

Asumir el control en la gestión del agua pública (devolviendo a los ríos y manantiales los millones de metros cúbicos usurpados anualmente y a la sociedad su agua), mejorar el conocimiento de los acuíferos y de sus aguas subterráneas (conscientemente marginada su potencialidad para solucionar problemas locales y de abastecimiento público) junto con la desalación, la depuración y la reutilización de las aguas, la mejora de las redes de distribución, la aplicación del agua liberada del trasvase Tajo-Segura (reemplazado en las zonas de riego costeras por la desalación) en las comarcas del interior, la transparencia en la gestión, la democratización y participación ciudadana en la propuesta de alternativas, son las claves para la futura gestión del agua en el levante y de su desarrollo económico sostenible y compatible con el medio ambiente.

Si todos los poderes públicos dejan de tensionar a la sociedad, empecinados algunos en imponer a los otros proyectos faraónicos propios de la España subdesarrollada de los 50, y se ponen a colaborar en la materialización de estas alternativas (que están avaladas por la comunidad científica internacional) no quedará lejos el día en que los ciudadanos de algunas zonas de Alicante y Murcia podamos incluso volver a beber y a cocinar con agua del grifo con garantía no sólo de potabilidad sino también de calidad.

La democracia aplicada al agua en el levante supondrá en breve un valor añadido y un certificado de calidad para su modelo de desarrollo y crecimiento económico cimentado en una nueva cultura del agua. ♦



Momento en que se ejecuta un sondeo ilegal cerca de Jumilla, Murcia.



Río Segura en Ojós, Murcia.



Balsa de riego de enormes proporciones para almacenar agua destinada a nuevos regadíos. Lorca, Murcia.



Punto de entronque en el canal del Trasvase Tajo Segura (Alhama) de la tubería que lleva el agua a la costa de Mazarrón.

